



"2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación".

Toluca de Lerdo, México; a 24 de enero de 2013.

**C. DIPUTADO SECRETARIO
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA H. "LVIII" LEGISLATURA
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE**

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se somete a la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de Usted, Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Víctimas del Estado de México y se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, que tiene por sustento la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, significaron un parteaguas en el sistema jurídico mexicano en cuanto a la protección de víctimas y ofendidos del delito; anteriormente el derecho punitivo se enfocaba en el sujeto activo del delito, soslayando a la víctima; por lo que, dicha reforma constituyó un hito para el marco normativo rector para el sujeto pasivo del delito.

En esta congruencia, la reforma a la Ley Máxima de la Federación, publicada en el referido órgano de difusión oficial el 18 de junio de 2008, contribuyó de igual modo con la consolidación de disposiciones jurídicas en la materia; destacando que con dicha adecuación normativa se implementó el sistema de justicia penal acusatorio adversarial y oral, en cuyas disposiciones se contempla lo relativo a la víctima y al ofendido del delito, que al haber sufrido un menoscabo en su persona, bienes o derechos se constituye como la parte más vulnerable del proceso penal; en esa virtud, el artículo 20 apartado C de la Constitución General contiene un catálogo de derechos humanos fundamentales en los términos siguientes:

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa.

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas las personas que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación.

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos.

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

El Estado de México, siempre a la vanguardia ha recogido los principios constitucionales de referencia, en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se considera víctima al directamente afectado por el delito, a las agrupaciones, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos siempre que su objeto se vincule directamente con aquéllos y a las comunidades indígenas, en los hechos punibles que impliquen discriminación o genocidio respecto de los miembros de la etnia o generen regresión demográfica, depredación de su hábitat, contaminación ambiental, explotación económica o alienación cultural; en tal congruencia, dicho ordenamiento jurídico, considera ofendido, a la persona que individual o colectivamente, haya sufrido indirectamente un daño físico, psicológico, patrimonial o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales a consecuencia de conductas consideradas como delitos en la legislación vigente.

Cabe destacar que cuando con motivo del delito muera la víctima, se considerarán ofendidos al cónyuge, concubina o concubinario, los descendientes consanguíneos o civiles, los ascendientes consanguíneos o civiles, los dependientes económicos, parientes colaterales hasta el cuarto grado y el Estado a través de las instituciones de protección a víctimas de delitos.

El dispositivo normativo de mérito contempla que en todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, tienen los derechos siguientes:

I. Los establecidos en el artículo 20 apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos y tratados internacionales, este código y demás ordenamientos legales aplicables.

II. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este código y demás ordenamientos, cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal.

III. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor en caso de que no hable español o tenga discapacidad auditiva, en cualquier etapa de la investigación o del proceso.

IV. Coadyuvar con el ministerio público, a que se le reciban y desahoguen los datos o elementos de prueba con los que cuente, desde la investigación hasta el proceso.



- V. Intervenir en el juicio e interponer los medios de impugnación que este código establece.
- VI. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia.
- VII. Ser notificados de todas las resoluciones que suspendan o finalicen el proceso, así como todas las que sean impugnables.
- VIII. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo que lo pueda solicitar directamente.
- IX. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, se llevarán a cabo sus declaraciones en las condiciones que establezca este código.
- X. Que se le resguarde su identidad y otros datos personales en diversos casos.
- XI. Recibir del ministerio público protección especial de su integridad física o psicológica, con inclusión de su familia inmediata, cuando corra peligro en razón del papel que desempeñe en el proceso penal.
- XII. Que el ministerio público y el órgano jurisdiccional, garanticen que ningún medio de comunicación publique información confidencial, que haga referencia a datos personales y que atente contra la dignidad de la víctima u ofendido.
- XIII. Solicitar al ministerio público o al juez de control las medidas cautelares y providencias para proteger su vida, integridad física y psicológica, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares y de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, o bien cuando existan datos suficientes que indiquen que éstos pudieran ser afectados por los probables responsables o terceros implicados de la conducta delictiva.
- XIV. Impugnar ante el juez de control las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
- XV. Recibir los servicios de mediación, conciliación y demás medios alternos de solución de controversias.
- XVI. Ser informada de las resoluciones que suspendan o finalicen el proceso.
- XVII. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal.
- XVIII. Si está presente en el debate, a tomar la palabra después de los informes finales y antes de concederle la palabra final al imputado.
- XIX. Que su declaración o interrogatorio sea realizado en su lugar de residencia, previa dispensa solicitada por sí o por un tercero, si por su edad o incapacidad física, estuviere imposibilitada para comparecer a ese acto procedimental.
- XX. Ejercer y desistirse de la acción penal privada en los casos que este código establece.
- XXI. Solicitar justificadamente la reapertura de la investigación cuando se haya decretado el archivo temporal.



XXII. Que no se divulgue su identidad ni ser presentado públicamente, sin su consentimiento.

En esta tesis, el 23 de febrero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, cuyo objeto es establecer disposiciones en favor de la víctima y ofendido, a consecuencia de la comisión de un hecho delictuoso, para que reciba asesoría jurídica, información sobre sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como atención médica y psicológica de urgencia, en los casos procedentes, a ser orientada sobre los mecanismos existentes para solicitar y exigir la reparación del daño, y para coadyuvar con el Ministerio Público a efecto de que se garanticen medidas cautelares, providencias y de protección de las víctimas directas e indirectas, ofendidos, testigos y en general de todos los sujetos que deban ser protegidos contra actos provenientes del sujeto activo del hecho delictuoso, incluyendo su recuperación e integración social.

Asimismo, en fecha 26 de octubre de 2011, se publicó en el Periódico de referencia, Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del delito del Estado de México, la cual tiene como objeto es crear a la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, con la finalidad de operar, coordinar, dirigir y controlar la defensa especializada para víctimas y ofendidos del delito; son principios que rigen a la Defensoría, la confidencialidad, continuidad, eficiencia, especialidad, ética, gratuidad, honradez, igualdad y equilibrio procesal, independencia técnica, legalidad, obligatoriedad, profesionalismo, responsabilidad profesional y solución de conflictos.

En este orden de ideas, resulta menester continuar fortaleciendo el marco jurídico estatal, mediante la modernización de las disposiciones protectoras de los derechos humanos de la víctima; para lo cual se propone a esa H. Soberanía Popular la expedición de una Ley que garantice los derechos de las víctimas y vele por su protección; el ordenamiento jurídico que se propone, consta de siete títulos.

El Título Primero, de Disposiciones Generales contempla el objeto, los sujetos, las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, los principios rectores y el establecimiento del precepto, por virtud del cual la interpretación de la norma, favorecerá en todo tiempo, la protección de los derechos de las víctimas; de igual modo se establece de manera puntal el concepto de víctima y los derechos de la misma.

El Título Segundo establece un catálogo pormenorizado de las autoridades competentes y sus atribuciones en la materia, incluyendo desde luego a los Municipios.

El Título Tercero contempla al Sistema Estatal de Víctimas, lo relativo a la Comisión Ejecutiva como organismo público descentralizado de la Secretaría General de Gobierno, cuyo objeto es posibilitar la representación y participación de las víctimas, se prevén las disposiciones de su organización y la coordinación de acciones; destaca la creación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para brindar los recursos necesarios tendientes precisamente, a la reparación integral de las víctimas; de igual modo, se prevé la creación del Registro Estatal de Víctimas como el mecanismo administrativo y técnico que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas.

El Título Cuarto, contempla la creación de un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, denominado "Asesoría Jurídica" cuyo objeto es operar, coordinar, dirigir y controlar la defensa especializada para víctima; al efecto, se han previsto las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de dicho órgano desconcentrado.

En esta tesis, el Título Quinto de la Ley que se propone prevé las obligaciones del asesor jurídico en términos generales y en supuestos particulares por materia; por su parte el Título Sexto establece la existencia del Centro de Atención e Información para todas las Víctimas y Ofendidos que requieran



asistencia jurídica; finalmente, el Título Séptimo contempla las causas del retiro del patrocinio, los impedimentos para la designación de asesores jurídicos y el régimen de responsabilidades.

A efecto de armonizar el marco jurídico contextual con la reforma que se plantea, se propone de igual modo la reforma de diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, sin soslayar desde luego, la necesaria abrogación de las leyes que en la materia gozan, al día de hoy, de vigencia.

En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado por el Maestro Efrén Rojas Dávila, Secretario General de Gobierno del Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ese H. Cuerpo Legislativo, esta Iniciativa de Decreto, para que de estimarla correcta se apruebe en sus términos.

Reitero a Usted, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MEXICO**

**DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).**

**SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
MTRO. EFRÉN ROJAS DÁVILA
(RÚBRICA).**



Toluca, Capital del Estado de México, a 29 de abril de 2013.

CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA DE LA
H. LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO

Honorable Asamblea:

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 6° y 116 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos; 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 28 fracción I y 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por su digno conducto, como diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la siguiente iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según UNICEF, *"Los menores víctimas del maltrato y el abandono son aquel segmento de la población conformado por niños, niñas y jóvenes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo o parcial"*.

La violencia es un fenómeno mundial, todo ser humano es susceptible al maltrato; pero existen grupos con alta vulnerabilidad hacia esta situación como son los menores de edad. Para efectos de esta iniciativa se entenderá por "violencia"¹ a la acción violenta o contra el natural modo de proceder, y "maltrato"² como el tratar mal a alguien de palabra u obra.

Le preocupación por el maltrato a los menores es relativamente reciente, en 1962 Henry Kempe y Silverman, acuñaron la expresión "síndrome del niño golpeado", basándose en características físicas presentadas en niños que ingresaban al servicio de pediatría del Hospital General de Denver, Colorado. Se observó que los niños no sólo eran agredidos de forma física, sino emocionalmente o por negligencia³.

En 1965 en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de México se reconoció al primer grupo de niños maltratados. Posteriormente en 1977, el doctor Jaime Marcovich realizó una vasta investigación con base en la observación de 686 casos de maltrato infantil comprobado. A partir de ese año se empezó a estudiar sistemáticamente el fenómeno del maltrato en menores, sin que se realizaran acciones para combatirlo o prevenirlo con eficacia⁴.

En los últimos años, el Estado Mexicano ha suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales de derechos humanos, algunos de los cuales se refieren a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Donde el Estado adquiere una serie de obligaciones a respetar y adoptar, para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en dichos instrumentos.

¹ UNICEF. Congreso Nacional sobre. Maltrato al Menor. México. 1993, p. 30.

² Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

³ Instituto de la Salud Pública. Maltrato Infantil un problema mundial, Vol. 40. No. 1, enero-febrero de 1998.

⁴ UNICEF. Congreso Nacional sobre Maltrato al Menor, México, 1995, p. 30.



La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25-2, establece que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Asimismo, en la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, se establece la necesidad de protección y cuidados especiales de orden tanto material como psicológico y afectivo así como jurídico. Lo anterior a fin de garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. En su artículo 3-1, dispone que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; y en el artículo 3-2, establece que "los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas".

Con la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) el 19 de junio de 1990, por parte del Estado Mexicano, los niños y niñas mexicanos pasaron a ser considerados sujetos tutelares de derechos en lugar de objetos de protección de sus familias o del Estado. En este instante, la mayor parte de la legislación mexicana era "incongruente" con la nueva norma internacional, violándose así, derechos de millones de niños y niñas.

En este contexto nace la reforma constitucional en materia de derechos humanos⁵, que reconoce que todas las personas son titulares de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que Estado Mexicano sea parte. Donde se favorece el principio "pro personae", lo que significa que en las decisiones que se tomen deberá garantizarse la protección más amplia a la persona.

Por si misma, la reforma constitucional no trae consigo un cambio radical para la labor jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación debía ejercer control de convencionalidad ex officio entre normas internas y la Convención Americana⁶. Adicionalmente, se reconoce a la infancia como un grupo diferente al de las personas adultas, en virtud de que sus características estructurales conllevan a un trato diferenciado⁷.

Si reconocemos que las niñas, niños y adolescentes tienen características cognitivas y emocionales⁸ diferentes en general frente a los adultos, sería evidente el desarrollar medidas especiales para garantizar que el menor pueda participar en un escenario ad hoc a sus necesidades, pudiendo expresarse libremente y con garantías por parte de los que imparten la justicia. Quienes, en considerables ocasiones, revictimizan a los menores debido al ambiente formalista, distante y muchas veces carente de atención especializada para los menores de edad, haciendo a un lado el interés superior de la niñez⁹.

Aunado a ello, el lenguaje utilizado en los juicios, no sólo es de personas adultas, sino particularmente complejo e intimidante para los menores; experiencia que inhibe el comportamiento

⁵ Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, mediante la cual se modificó la denominación del Capítulo 1 del Título Primero y reformó, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.

⁶ Sentencia Radilla, Varios 912/2010

⁷ El artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado"

⁸ Oficina de la Detorsoria de los Derechos de la Infancia, 2005. El niño víctima del delito. Fundamentos y orientaciones para una reforma procesal: penal. México: Secretaría de Seguridad Pública. Cap. 3. Las características de la infancia y sus implicaciones procesales

⁹ Segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, mayo 2011. Tesis aislada común, Tomo XXXIII, pag.1274.



de un infante. Asimismo cuando la expectativa sobre el razonamiento y el lenguaje del niño, niña o adolescente es igual al que se espera de una persona adulta, contrarresta su capacidad de expresión por lo que sus opiniones se ven mermadas y poco tomadas en cuenta¹⁰.

De ahí la importancia de adoptar las medias de actuación necesarias para la Ley de Víctimas del Estado, del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes; de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que las consecuencias de esta falta de procedimientos puede ser muy negativa para la formación de la personalidad, salud mental, desempeño académico e incluso el desarrollo de conductas delincuenciales y antisociales en los niños, niñas y adolescentes¹¹.

Si la justicia es percibida como parte de este proceso de recuperación del niño víctima del delito, entonces es ilógico que el proceso judicial continúe degradando y dañando a la víctima e impida su recuperación al ocasionar traumas innecesarios y completamente evitables.

En consecuencia, al afrontar el proceso de administración de justicia, como se presenta en la actualidad, es decir, sin mecanismos especiales para la infancia, lejos de proteger al menor y propiciar el proceso de recuperación y propiamente de justicia, no hace más que reagudizar e incluso agravar la victimización.

En mérito de las consideraciones planteadas, someto a la estimación de la Asamblea la presente iniciativa para que, de estimarla conducente, se apruebe en sus términos anexando el proyecto de decreto correspondiente.

"Por una patria ordenada y generosa"

DIP. ADRIANA DE LOURDES HINOJOSA CÉSPEDES

(RÚBRICA)

¹⁰ Suprema Corte de Justicia de la Nación: 2012. Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes.

¹¹ Angulo, Castañar, Gnesbach, Magalon y Rivera, 2005, El Niño Víctima del Delito: Fundamentos y Orientaciones para una Reforma Procesal Penal, México, D.F.



"2014. Año de los Tratados de Teoloyucan"

Palacio del Poder Legislativo
Toluca de Lerdo, México,
24 de abril de 2014,

**CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA
DE LA H. LVIII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE MÉXICO
PRESENTES**

En ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51 fracción II y 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y artículo 28 fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; por su digno conducto, el suscrito Diputado Armando Soto Espino, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a la elevada consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Estatal para el Tratamiento de Víctimas, deroga los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y abroga las leyes de Protección a Víctimas del Delito del Estado de México y de la Defensoría Especializada para Víctimas del Delito del Estado de México, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como mandato la protección de los derechos humanos, siendo así que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete al conocimiento de esta soberanía la presente propuesta con el fin de crear la legislación necesaria para que el Estado de México tenga el mecanismo para el tratamiento y apoyo a las víctimas que se encuentren en el ámbito legal de nuestra entidad.

Es obligación del estado salvaguardar la seguridad de las personas, a efecto de que estas no sean vulneradas en su esfera jurídica y menos aún en lo que respecta al hecho de ser sujetos pasivos en la comisión de algún delito, o bien de cualquier otro acto ya sea de autoridad, o bien de particular, que afecte la integridad de sus derechos que tiene como persona.

La presente propuesta, no pretende de ninguna manera estar por encima ni mucho menos sustituir a la procuración de justicia como función vital del estado, pero señala las bases de coordinación y retoma los avances que en materia de víctimas ha alcanzado la federación a través de la Ley General de Víctimas, estableciendo los tratamientos básicos que debe tener una persona que ha sido víctima, procurando la restitución del daño por la comisión de un delito o de un hecho victimizante señalado en el artículo 6 de la referida Ley General.

Siendo así que con la finalidad de lograr una mejor protección de los derechos humanos de las víctimas, resulta necesaria la instrumentación de medidas que permitan el resarcimiento de los daños causados y que el Estado, como responsable de la función de brindar seguridad a sus integrantes, solidariamente responda en la medida de lo posible, por la violación de los derechos fundamentales de las personas en su calidad de víctimas.

La intención de la propuesta que se pone a consideración de esta Soberanía, es la coordinación con la legislación general, respetando los mínimos que se establecen en la misma, y otorgando en otros casos una mayor cobertura en los derechos de la población mexiquense.



El propósito es que desde el momento en que exista la simple presunción de ser víctima de un delito o de hecho victimizante, el Estado tenga la obligación de que además de procurar justicia, otorgue un apoyo y un tratamiento especial por la calidad de víctima que tiene una persona que ha sido vulnerada en sus derechos humanos.

En esta iniciativa, se propone un cambio en la denominación que se tenía en la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México, así como del concepto "defensa de la víctima" que hace referencia esta norma, pues este Grupo Parlamentario considera que lo que se pretende a través de una ley de esta naturaleza, no es la protección de la víctima, sino más bien de la forma en que una persona debe ser tratada y los derechos que se generan al ser pasivo en un acto delictivo o bien, cuando se encuentra ante un hecho que puede vulnerar sus derechos humanos y victimizarlo, provocándole un sufrimiento.

Asimismo, consideramos que el término defensa utilizado en la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, también es impreciso, pues una víctima no está sufriendo un ataque durante la secuela de investigación o proceso judicial o administrativo, siendo incorrecto que a una víctima se le "defienda" por el ejercicio de un derecho y cuando no hay acción jurídica que recaiga en ella.

Por tales circunstancias, consideramos más adecuado el tratamiento y apoyo a las víctimas, pues el hecho de ser víctima, se debe a la incapacidad que el Estado tuvo en un momento dado de proteger a la persona en sus derechos humanos.

Se pretende a través de esta iniciativa, una Ley de Víctimas de nuestro Estado que responda a los reclamos de la sociedad y se atenga a los principios más avanzados de los derechos humanos, que incluya la promoción de la mayor protección en caso de daños físicos, daño moral, lucro cesante, pérdida de oportunidades —en particular educativas y prestaciones sociales; daños emergentes por asesoría jurídica; el pago de todo tipo de tratamientos médicos y psicológicos.

Procurando incluir los ámbitos que estén involucrados en la promoción de la restitución de la situación anterior a la existencia del delito o hecho victimizante que generó a la víctima, poniendo al propio Estado como coadyuvante a través de las propias instituciones de su gobierno, para una mejor restitución del daño cometido en contra de la víctima.

Siendo así que la reparación tiene como objetivo restablecer el orden jurídico quebrantado por la vulneración a los derechos humanos, afirmar la seguridad y la justicia en las relaciones sociales, así como para el derecho de la persona, y el resarcimiento por la lesión causada, atendiendo la obligación de restituir el estado de cosas a su existencia antes de la actuación delictiva o que vulnere la esfera de los derechos humanos de la víctima.

Es a través del tratamiento especial a la víctima y la reparación del daño que se evita una afectación permanente en sus derechos fundamentales, por tal razón, es necesario que además de que el Estado reconozca la violación, establezca los mecanismos conforme a los cuales se considere la reparación de actos o situaciones violatorias que se encuentren acreditadas y apoye solidariamente con la restitución emocional, y en algunos casos a criterio de los juzgadores, también económicamente.

Una vez que el juzgador considere acreditada la existencia de la violación a un derecho, además de tal declaración, se deben establecer las consecuencias jurídicas que debe asumir tanto el victimario como del Estado para la reparación de la vulneración a la esfera jurídica de las personas.

El Estado no puede renunciar a su función de apoyar a las víctimas en todos los ámbitos requeridos pues de lo contrario corre el riesgo de ser únicamente un Estado policía, parcial y sin respaldo social;



un Estado así no cumpliría con su obligación, de cuidar el bienestar de todos los que son sus integrantes.

En este sentido, se propone como formas de restitución para los derechos humanos, la indemnización, la cual permite compensar con un bien útil, universalmente apreciado, como lo es el dinero, la pérdida o el menoscabo de un bien de la misma naturaleza, e incluso también cuando se trata de bienes de naturaleza distinta, que son irrecuperables o imposibles de reponer o rescatar conforme a su propia especie.

Tenemos como principales formas de efectos a reparar como es el daño material, el cual se define como las consecuencias patrimoniales que derivan de la violación, en forma directa, un detrimento o erogación más o menos inmediata y en todo cuantificables económicamente, incluyendo en este caso al lucro cesante o perjuicio que sufre la víctima.

En lo que respecta al considerado daño inmaterial, es el que se refiere a los efectos psicológicos y emocionales sufridos como consecuencia de la vulneración a los derechos humanos de la víctima, y que aún y cuando no son propiamente cuantificables en dinero, debe ser atendido a través de la utilización de los principios de equidad, pues cuanto mayor sea el daño, mayor podrá ser la indemnización por este concepto y el Estado podría contribuir a través de las instituciones de salud para la mejor recuperación anímica causada por el daño causado.

En la propuesta, se hace referencia a las obligaciones consagradas en los artículos 120, 123 y 124 de la Ley General de Víctimas, como una forma de retornar las mismas en una legislación de índole Estatal, referencia mediante la cual, se compromete a los servidores públicos en general, a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial, sus obligaciones en el tratamiento a las víctimas.

Se amplía el catálogo de derechos de las víctimas que refiere la Ley General de Víctimas, generando así una mayor protección, obligando a los agentes del Ministerio Público al respeto de los mismos, sin necesidad de que el asesor jurídico o la víctima, tengan que invocarlos al momento de estar ante su presencia.

La propuesta retorna la obligación de la Ley General, otorgando la facultad al DIF para la entrega de paquetes escolares y uniformes adicionando becas que no contempla la referida Ley, mismas que deben ser suficientes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo de nuestro Estado.

Se crea la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, como lo mandata la Ley General, se designan las autoridades que lo conforman y se le otorgan facultades ejecutivas al Director General del Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, pues es a través de esta nueva figura que se le otorga mayor efectividad a la actividad de apoyo a las víctimas.

En esta iniciativa, se establecen criterios para la reparación integral de los daños, mismos que adicionados a las formas que refiere la Ley General, se genera una mejor y mayor cobertura a las víctimas.

Consideramos una reestructuración de las instituciones de procuración a las víctimas, pues actualmente se cuenta con la defensoría de víctimas y el Instituto Estatal de Protección a Víctimas, siendo así que hay una dualidad de funciones, por tal motivo, se propone la derogación de los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para que las funciones del actual Instituto, sean retomadas por el de nueva creación, pero ahora



dependiente de la Secretaría General de Gobierno, como es hasta ahora la Defensoría Especializada de Víctimas.

Es pertinente retomar los principios rectores que establece el artículo 11 de la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas del Delito del Estado de México para ahora ser principios rectores del Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas, pues los mismos los consideramos idóneos para la función pública de esta nueva institución.

De igual manera, se retoman varias de las funciones y estructura de la Defensoría Especializada para Víctimas del Delito, para ser ahora el nuevo instituto, pero con más funciones y protagonismo en el ámbito federal, pues se autoriza a su Director General como el representante ante la federación del sistema de tratamiento de víctimas del Estado de México.

Los defensores cambian de denominación por el de asesores jurídicos para ser congruentes con la Ley General, adicionalmente que como en líneas anteriores se expuso, creemos que la defensa no es propia para una víctima.

Se retorna el Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito, el cual tiene cuatro nombres distintos en la legislación actual, a efecto de que el Estado cuente con recursos económicos para la reparación de los derechos vulnerados, cuando sea necesaria su salvaguarda con economías del erario público.

Al quedar incluido el funcionamiento y estructura al Instituto Estatal para el Apoyo de Víctimas en el cuerpo de la iniciativa y desaparecer la Defensoría Especializada de Víctimas, se propone la abrogación de la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, dejando la legislación en el tema de Víctimas -exceptuando la de trata de personas, en un solo ordenamiento jurídico.

Por lo antes expuesto, se propone crear la Ley Estatal para el Tratamiento de Víctimas, derogar los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y abrogar las leyes de Protección a Víctimas del Delito del Estado de México y de la Defensoría Especializada para Víctimas del Delito del Estado de México, para que en caso de estimarlo conveniente, se apruebe en sus términos.

ATENTAMENTE
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

Dip. Armando Soto Espino
(Rúbrica).

Dip. Jocías Catalán Valdéz
(Rúbrica).

Dip. Xóchitl Teresa Arzola Vargas
(Rúbrica).

Dip. Silvestre García Moreno
(Rúbrica).

Dip. Héctor Miguel Bautista López
(Rúbrica).

Dip. Ana Yurixi Leyva Piñón
(Rúbrica).

Dip. Saúl Benítez Avilés
(Rúbrica).

Dip. Epifanio López Garnica
(Rúbrica).

Dip. Leonardo Benítez Gregorio
(Rúbrica).

Dip. Octavio Martínez Vargas
(Rúbrica).



Dip. Tito Maya de la Cruz
(Rúbrica).

Dip. Armando Portuguez Fuentes
(Rúbrica).

ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 487

**LA H. "LVIII" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
DECRETA:**

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley de Víctimas del Estado de México, para quedar como sigue:

LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, así como de aplicación y observancia obligatoria en el Estado Libre y Soberano de México, y tiene por objeto:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas consagrados en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Víctimas, los contemplados en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables y conocer de la violación a derechos humanos, coordinando las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir su ejercicio efectivo.

II. Establecer las obligaciones a cargo de las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, y de los que intervengan en los procedimientos relacionados con la atención a víctimas.

III. Crear la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

IV. Velar por la protección de las víctimas, así como proporcionar ayuda, asistencia y una reparación integral.

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales sobre derechos humanos y la Ley General de Víctimas, interpretando extensivamente las normas que consagran o amplían los derechos humanos y restrictivamente las que los limitan o restringen.

Artículo 2. Esta Ley se aplicará a todas las víctimas, sin distinción alguna motivada por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 3. Son sujetos protegidos por esta Ley, las víctimas y ofendidos del delito.

Artículo 4. Son autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley:

- I. El Gobernador.
- II. La Secretaría General de Gobierno.
- III. La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México.
- IV. La Procuraduría General de Justicia.
- V. El Poder Legislativo.
- VI. El Poder Judicial.
- VII. Los órganos autónomos.
- VIII. Los municipios.
- IX. Las demás dependencias y organismos auxiliares del Estado y de los municipios.

Artículo 5. Además de lo establecido en la Ley General de Víctimas para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Asistencia: Al conjunto de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política.

II. Atención: A la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con miras a facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

III. Defensoría Especializada: A la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México.

IV. Código Penal: Al Código Penal del Estado de México.

V. Comisión: A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

VI. Comisión Ejecutiva: A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.

VII. Constitución Federal: A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VIII. Constitución Local: A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

IX. DIFEM: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

X. Fondo: Al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito.

XI. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima.

XII. Ley: Ley de Víctimas del Estado de México.

XIII. Procuraduría: A la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

XIV. Registro: Al Registro Estatal de Víctimas.

XV. Secretaría: A la Secretaría General de Gobierno.

XVI. Sistema: Al Sistema Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.

XVII. Sistemas municipales: A los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.

XVIII. Tratados internacionales: A los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal.

XIX. Violación de derechos humanos: A todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, Constitución Local o en los tratados internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe aquiescencia o colaboración de un servidor público.

XX. Victimización secundaria: A la victimización producida no como resultado directo de un acto delictivo en el cual estuvo presente, sino por la respuesta de las instituciones y de las personas en relación con la víctima.

Artículo 6. Son principios rectores de esta Ley, los siguientes:

I. Dignidad: Valor, que implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte de la autoridad o de los particulares.

II. Buena fe: Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas, no deben criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deben brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos.

III. Complementariedad: Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial, los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas deberán realizarse de manera subsidiaria, armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, como las colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.

IV. Debida diligencia: La autoridad deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable, para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención,



asistencia, derecho a la verdad justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derechos.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley; realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos; contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas.

V. Enfoque diferencial y especializado: Se reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros. Las autoridades encargadas de la aplicación de esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Todas las normas, instituciones y actos que se desprendan de la presente Ley deberán integrar un enfoque transversal de género y de protección de personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

VI. Enfoque transformador: Las distintas autoridades comprometidas en la aplicación de la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes.

VII. Gratuidad: Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en la Ley, serán gratuitos para la víctima.

VIII. Igualdad y no discriminación: En el ejercicio de los derechos de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de enfoque diferencial.

IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia: Todos los derechos contemplados en la Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada.

X. Máxima protección: Entendido como la obligación de la autoridad de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas y de violaciones a los derechos humanos.

La autoridad adoptará en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad.

XI. No criminalización: La autoridad no deberá agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse.

XII. No victimización secundaria: Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. La autoridad tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos.

XIII. Participación conjunta: Para superar la vulnerabilidad de las víctimas es necesario trabajar de manera conjunta. En ese sentido, las autoridades deberán implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral. La sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas, podrán ejecutar planes o medidas que aporten a la consecución de dichos objetivos.

Garantizados sus derechos, la víctima deberá colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, dentro de sus posibilidades, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos.

XIV. Progresividad y no regresividad: Las autoridades comprometidas en la aplicación de la Ley adquieren la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar aquellos derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados.

XV. Publicidad: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

La autoridad deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías, y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.

XVI. Rendición de cuentas: Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación en donde debe contemplarse la participación pública, incluidas las víctimas.

XVII. Transparencia: Todas las acciones, mecanismos y procedimientos de la autoridad en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.



XVIII. Trato preferente: Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas.

Artículo 7. En caso de conflicto entre las disposiciones contenidas en esta Ley y otras normas que tengan por objeto la defensa, asistencia y protección de las víctimas, habrá de aplicarse la que les resulte más favorable.

Artículo 8. Las medidas de atención y protección a que se refiere la Ley serán proporcionadas por las autoridades en el ámbito de su competencia.

Artículo 9. Conforme a las bases que se establecen en la Ley, las autoridades de atención a víctimas deberán coordinarse para cumplir con los fines de los derechos de las víctimas y la protección a sus derechos humanos.

CAPÍTULO II DE LA VÍCTIMA

Artículo 10. La víctima directa es la persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo físico, mental, emocional, económico o en general cualquiera que ponga en peligro o lesione sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos.

Son ofendidos las víctimas indirectas que son familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima directa y toda persona que de alguna forma, sufra daño o peligro en su esfera de derechos por auxiliar a una víctima.

Cuando con motivo del delito muera la víctima directa, se considerarán víctimas indirectas:

- I.** Al cónyuge, concubina o concubino.
- II.** Los descendientes consanguíneos o civiles hasta el cuarto grado.
- III.** Los ascendientes consanguíneos o civiles hasta el cuarto grado.
- IV.** Los dependientes económicos.
- V.** Parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Artículo 11. La condición de víctima se adquiere con la existencia del daño o menoscabo de sus derechos; y se reconocerá a partir de la noticia del hecho victimizante. El acceso a los beneficios del presente ordenamiento dependerá de los requisitos que para el efecto establezca la Comisión Ejecutiva.

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

Artículo 12. Las víctimas tienen, conforme a la Ley y sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos jurídicos, de manera enunciativa, los derechos siguientes:



- I.** Recibir un trato digno, comprensivo y respetuoso por parte de los servidores públicos de las instituciones responsables del cumplimiento de esta Ley, desde el primer momento en que tengan intervención.
- II.** Recibir, desde la comisión del delito, asesoría jurídica, así como asistencia médica, de trabajo social y psicológica de urgencia.
- III.** Recibir atención y ser canalizados a centros especializados de atención integral, para su tratamiento necesario y el total restablecimiento físico, psicológico y emocional, directo e inmediato.
- IV.** Ser informado de los derechos que en su favor establecen los ordenamientos jurídicos en la materia.
- V.** Que se les repare el daño y en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitarla sin menoscabo de que las víctimas las puedan solicitar directamente o a través de los Defensores Especializados.
- VI.** Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género y en los casos en que las víctimas del delito sean niñas, niños o adolescentes, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público o la autoridad judicial, según corresponda, dicten de inmediato y de oficio, las medidas de protección necesarias para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica, de acuerdo a su edad, grado de madurez, desarrollo o necesidades particulares; así como las providencias necesarias para su debido cumplimiento y ejecución.
- VII.** Que se resguarde su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean niñas, niños o adolescentes, cuando se trate de delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada, trata de personas y cuando a juicio de la autoridad, sea necesario para proteger su vida e integridad física, salvaguardando, en todo caso, los derechos de defensa.
- VIII.** Solicitar directamente o a través de los Defensores Especializados o abogados particulares en su caso al Ministerio Público o al Juez de Control las medidas cautelares y providencias precautorias para proteger su vida, integridad física y psicológica, bienes, posesiones o derechos.
- IX.** Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no hable el idioma español, o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual en cualquier etapa del proceso.
- X.** Permanecer en un lugar donde no pueda ser visto por el indiciado, cuando durante el proceso tuviere que participar en la diligencia de identificación del mismo.
- XI.** Tener acceso a los beneficios del Fondo.
- XII.** Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde la víctima se encuentre, para que sea interrogado o participe en el acto para el cual fue citado, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, con anticipación.
- XIII.** A la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.
- XIV.** A la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar ella y sus familiares con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad



personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos.

XV. A que su consulado sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras.

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido.

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad.

XVIII. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral.

XIX. Recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reincorporación a la sociedad.

XX. Participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia.

XXI. Recibir en los casos que procedan, la ayuda provisional y humanitaria.

XXII. A coordinarse con otras víctimas para la defensa de sus derechos.

XXIII. Contar con espacios colectivos donde se trabaje el apoyo individual o colectivo y que le permitan relacionarse con otras víctimas.

XXIV. Solicitar y recibir ayuda oportuna, rápida, gratuita y efectiva de acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el delito, con el objetivo de atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, en el momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial.

Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra la autoridad en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

XXV. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por la autoridad competente, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos.

XXVI. A que les sea compensado en forma expedita y justa. En los casos en que la autoridad judicial dicte sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de las reparaciones, incluido el pago de la compensación. Si la víctima, su abogado particular o su defensor especializado no la solicitaran, el Ministerio Público está obligado a hacerlo.



XXVII. Obtener copia simple o certificada gratuita y de inmediato, de las diligencias en las que intervengan.

XXVIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que asesore a las autoridades competentes sobre la investigación de los hechos y la realización de peritajes.

XXIX. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

XXX. Gestionar ante el sector salud el tratamiento médico necesario que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio distinto al del enjuiciamiento.

XXXI. Solicitar el apoyo o reembolso de los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio, si la víctima reside en municipio distinto al del enjuiciamiento.

XXXII. A que se considere su discapacidad temporal o permanente, física o mental, así como su condición de niña, niño y adolescente o adulto mayor. Así mismo, a que se respete un enfoque transversal de género y las diferencias culturales, religiosas, de credo, étnicas, entre otras igualmente relevantes. Cuando sea necesario, la autoridad proporcionará intérpretes y traductores.

XXXIII. Acceder de manera subsidiaria, al Fondo previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones, administrativas, penales y civiles que resulten.

XXXIV. A que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por algún integrante de la Unidad de Atención Inmediata de Primer Contacto.

XXXV. A optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y la garantía de no repetición.

XXXVI. Impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

XXXVII. A la conciliación o mediación.

XXXVIII. A una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de la comisión del delito o de la violación de derechos humanos, al esclarecimiento de los hechos y a su reparación integral.

XXXIX. A conocer la verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron al igual que en los casos de personas fallecidas, desaparecidas, ausentes, no localizadas o extraviadas.

XL. A que las autoridades respectivas inicien, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Esto incluye la instrumentación de mecanismos de búsqueda conforme la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea parte.



XLII. A saber si figura en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares.

XLII. A que se les repare de manera oportuna, plena, diferenciada, integral y efectiva el daño que han sufrido como consecuencia del delito que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

XLIII. A que durante la investigación o el procedimiento penal no sea objeto de conductas consideradas delictivas o que vulneren su integridad o derechos por parte del sujeto a investigación o a proceso por el hecho por el cual ya es víctima.

XLIV. Los demás señalados en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los que México sea parte, Ley General de Víctimas, Constitución Local, la Ley y otras disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 13. Para los efectos de la Ley se entenderá que:

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del delito o de las violaciones de derechos humanos.

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del delito cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos.

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas.

V. Las medidas de no repetición buscan que el delito o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

VI. La reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales legalmente constituidas que hayan sido afectadas.

Las medidas procedentes de atención, protección, apoyo o servicios otorgados por las instituciones públicas del Estado y los municipios a las víctimas del delito serán gratuitos.

TÍTULO SEGUNDO DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 14. Las autoridades competentes para la aplicación de esta Ley están obligadas a proporcionar atención a las víctimas, respetando siempre los principios establecidos en la Ley, y en particular el enfoque diferencial para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena, en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 15. La Secretaría, en materia de atención a las víctimas, ejercerá las atribuciones siguientes:

- I.** Participar, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, en el diseño e instrumentación de políticas gubernamentales tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y, en ese contexto, intervenir en la ejecución de estrategias de protección a las víctimas.
- II.** Auxiliar a las demás dependencias encargadas de brindar atención y protección a las víctimas en el cumplimiento de sus funciones.
- III.** Coadyuvar con instituciones públicas y privadas encargadas de brindar atención y protección a las víctimas para garantizar su atención integral.
- IV.** Implementar mecanismos de coordinación con las autoridades municipales, a fin de que intervengan, conforme a sus atribuciones y competencias, en acciones y estrategias de atención y protección a víctimas del delito.
- V.** Fortalecer los mecanismos institucionales de diálogo con organismos no gubernamentales y actores representativos de la sociedad civil, con la finalidad de proporcionar atención a las víctimas, así como transparentar las acciones y esfuerzos de las dependencias y entidades en la materia.
- VI.** Las demás que le confieran la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, en materia de atención a las víctimas, ejercerá las atribuciones siguientes:

- I.** Coordinar los servicios de seguridad pública en materia de atención a víctimas.
- II.** Coadyuvar en las acciones tendientes a garantizar la protección de las víctimas del delito, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso penal.
- III.** Ejecutar las medidas cautelares y de protección que le ordene el Ministerio Público o la autoridad judicial.
- IV.** Formular, coordinar y ejecutar programas que contribuyan a una mejor atención y protección de las víctimas del delito.
- V.** Registrar las acciones preventivas, de apoyo y de atención a las víctimas que brinde en el ejercicio de sus funciones.
- VI.** Establecer canales de comunicación directa de atención con víctimas, con la finalidad de brindar el apoyo inmediato en casos de urgencia.
- VII.** Fortalecer los mecanismos de coordinación e intercambio de información con las autoridades competentes a fin de proporcionar protección a las víctimas del delito.
- VIII.** Establecer mecanismos de coordinación con instituciones policiales municipales y de las entidades federativas colindantes con el Estado de México, para la debida atención y protección de víctimas del delito.
- IX.** Colaborar con las autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas.

- X.** Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con la debida diligencia.
- XI.** Proporcionar información para la actualización de los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes conforme a su competencia.
- XII.** Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 17. La Secretaría de Salud, a través del Instituto de Salud del Estado de México, en materia de atención a las víctimas, ejercerá las atribuciones siguientes:

- I.** Brindar atención médica y psicológica de urgencia a las víctimas.
- II.** Coordinar y promover con las instituciones de salud privadas y con los organismos públicos que tengan a su cargo la prestación de servicios médicos, acciones de apoyo a las víctimas del delito, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.
- III.** Vigilar que la prestación de los servicios de salud a la víctima de violencia familiar o sexual, se sujeten a lo que establecen las Normas Oficiales aplicables y los protocolos respectivos.
- IV.** Dar seguimiento de los casos y expedientes clínicos, y señalar ante el Ministerio Público, el Juez o cualquier autoridad que lo requiera, todas las acciones realizadas y todos los aspectos que puedan ser útiles para la reparación del daño, conforme a las actuaciones del proceso penal respectivo.
- V.** Vigilar que las instituciones públicas y privadas de salud con quienes hayan suscrito convenios o acuerdos otorguen la atención médica de urgencia que requieran las víctimas en cumplimiento a esos instrumentos jurídicos.
- VI.** Colaborar en el establecimiento y operación de unidades de atención inmediata en los centros de atención de delitos vinculados a la violencia de género, en coordinación con las dependencias y entidades competentes.
- VII.** Proporcionar gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento.
- VIII.** Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar.
- IX.** Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del delito, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente.
- X.** La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición.

Artículo 18. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado y municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

Artículo 19. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

I. Hospitalización.

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos que la persona requiera para su movilidad y estética, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia.

III. Medicamentos.

IV. Gastos médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata.

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imagenología.

VI. Transporte y ambulancia.

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente.

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos.

IX. Servicios de anticoncepción de emergencia, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, previo consentimiento informado.

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y III y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, el Estado podrá rembolsar de manera completa, previa solicitud y procedencia que determine la Comisión Ejecutiva, teniendo dichas autoridades, el derecho de repetir contra los responsables. El procedimiento para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 20. El Estado o los municipios en donde se haya cometido el delito, pagarán a las víctimas, con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios, los gastos funerarios en los que ellas deban incurrir cuando sus familiares hayan sido víctimas del delito de homicidio. Estos gastos, incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben transportarse a otro lugar para los trámites de reconocimiento, podrán ser cubiertos dichos gastos.

Artículo 21. La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque psicosocial, educacional y de asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes entidades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que la misma hace referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.



Artículo 22. La Comisión Ejecutiva otorgará el carnet que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, conforme al Registro Estatal de Víctimas, con el fin de garantizar la asistencia y atención prioritarias para efectos reparadores.

Artículo 23. A toda víctima de violación sexual, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima, previo consentimiento informado, asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas se dispondrá de personal capacitado en tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Artículo 24. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus costos hayan sido cubiertos por la víctima, el Fondo se los reembolsará de manera completa previa solicitud y procedencia que determine la comisión ejecutiva, teniendo dichas autoridades, el derecho de repetir contra los responsables. El procedimiento para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 25. La Secretaría de Educación, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito ejercerá las atribuciones siguientes:

- I.** Asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo, si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el delito, por lo que la educación deberá contar con un enfoque transversal de género y diferencial, desde una mirada de inclusión social y con perspectiva de derechos.
- II.** Garantizar la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, a las víctimas del delito.
- III.** Impartir la educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.
- IV.** Prestar especial cuidado a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.
- V.** Prestar servicios educativos para que gratuitamente cualquier víctima o sus hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso de permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
- VI.** Proporcionar becas completas de estudio como mínimo hasta la educación media superior para la víctima del delito o sus familiares.
- VII.** Entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito, los paquetes escolares y uniformes, para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

VIII. Establecer los procesos de selección, admisión y matrícula que permitan a las víctimas del delito, que así lo requieran, acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado, y deberán implementar medidas para el acceso preferencia de las víctimas.

IX. Las demás que les confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 26. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Desarrollar políticas, programas y acciones de desarrollo social encaminadas al abatimiento de la pobreza, la marginación y la exclusión social como factores de origen de las conductas delictivas.

II. Instrumentar políticas, programas y acciones de desarrollo en favor de las víctimas y, en especial, en los casos de delitos vinculados con la violencia de género.

III. Verificar la situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza, así como de exclusión social, laboral, educativa y a los servicios de salud en que se encuentre la víctima para su probable inclusión en los programas de desarrollo.

IV. Difundir, a través de los medios con que cuente, los programas de desarrollo social que tengan en operación.

V. Promover la incorporación de víctimas en programas de empleo temporal y educativos, para efectos de su autosuficiencia y recuperar su autoestima.

VI. Las demás que le confieren esta Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 27. El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Brindar en el ámbito de su competencia, a las víctimas del delito, de delitos vinculados a la violencia de género, familiar y sexual, asesoría jurídica y atención psicológica, así como medidas especiales de protección, tomando en consideración las características particulares de la víctima.

II. Canalizar a las víctimas del delito a las instituciones especializadas y dar seguimiento a cada uno de los casos hasta su total restablecimiento e integración social.

III. Brindar protección y seguridad a las víctimas de delitos vinculados con la violencia de género, de violencia familiar y sexual, a través de los albergues con que cuente, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

IV. Brindar servicios de alimentación y educativos a las víctimas del delito, de delitos vinculados con la violencia de género con sus hijos en los albergues temporales con que cuente, en coordinación con las instituciones y dependencias competentes.

V. Promover y participar en la capacitación para la especialización y sensibilización de los servidores públicos que atienden a mujeres víctimas de delitos vinculados con la violencia de género, así como los relativos a la violencia familiar y sexual.



VI. Formular y gestionar programas educativos, de trabajo y sociales que fortalezcan el desarrollo integral y la plena participación de la mujer y de los adultos mayores.

VII. Gestionar la incorporación de la mujer o de los adultos mayores víctimas del delito, a programas de desarrollo social que le permitan mejorar su calidad de vida.

VIII. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 28. Los sistemas de desarrollo integral de la familia, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerán las atribuciones siguientes:

I. Coordinar y promover con las instituciones públicas y privadas de asistencia social, acciones de apoyo a las víctimas, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

II. Brindar, en el ámbito de su competencia, la atención médica, psicológica jurídica y social que requieran las víctimas del delito vinculados a la violencia de género, así como aquéllos de violencia familiar y sexual, a través de las áreas especializadas en los centros integrales correspondientes.

III. Canalizar a la víctima de delitos vinculados a la violencia de género, de violencia familiar y sexual a la autoridad correspondiente, para el inicio y trámite de las acciones jurídicas procedentes.

IV. Contratar o brindar servicios de alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos, durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

V. Facilitar el traslado de la víctima cuando se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo.

VI. Implementar programas y acciones destinadas a la prevención y erradicación de la violencia familiar, especialmente la ejercida contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, indígenas y adultos mayores.

VII. Las demás que les confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 29. La Procuraduría, a través del Ministerio Público, ejercerá de manera permanente durante el procedimiento y posterior a este, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito con independencia de las acciones que ejerza el Defensor Especializado, las atribuciones siguientes:

I. Entrevistar a las víctimas del delito en el lugar de los hechos o donde se encuentre y ordenar ahí mismo la atención jurídica, médica y psicológica de urgencia, cuando esto sea materialmente posible y las circunstancias del caso lo permitan, así como las diligencias correspondientes en materia de trabajo social y la intervención de instancias especializadas.

II. De resultar necesario, canalizar a las víctimas del delito a centros especializados de atención integral, para su tratamiento necesario y restablecimiento físico, psicológico y emocional, directo e inmediato.



III. Realizar las gestiones correspondientes ante las autoridades competentes para proporcionar atención a las víctimas del delito, en caso de ser necesario tratamiento posterior.

IV. Ordenar las medidas de protección que establece el Código de Procedimientos Penales aplicable y dictar las providencias necesarias para su debido cumplimiento y ejecución. Tratándose de delitos vinculados con la violencia de género, y en los casos en que las víctimas del delito sean niñas, niños o adolescentes, serán ordenadas de inmediato y de oficio, para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica.

V. Una vez que tenga conocimiento de hechos relacionados con víctimas de delitos vinculados con la violencia de género, practicar inmediatamente todas y cada una de las diligencias correspondientes, de conformidad con los protocolos e instructivos que autorice el Procurador, los cuales deberán ordenar la atención sensible y especializada de los asuntos de acuerdo con su naturaleza.

VI. Ordenar de oficio o a petición de las víctimas del delito, el aseguramiento de bienes del indiciado para garantizar la reparación del daño, durante la etapa de investigación no judicializada. Dicha medida deberá ser revisada por el Juez de Control, o una vez realizada la imputación, solicitar a la autoridad judicial el embargo precautorio, con el mismo fin.

VII. Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 30. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerá las atribuciones siguientes:

I. Orientar, asesorar jurídicamente, gestionar y otorgar apoyo a las víctimas en el ámbito de su competencia.

II. Promover y difundir los derechos de las víctimas, en el ámbito de su competencia.

III. Dar seguimiento a los casos de violencia de género, e intervenir en los sistemas de seguimiento y evaluación ciudadana y social de políticas gubernamentales.

IV. Solicitar a cualquier autoridad o servidor público dentro del Estado, conforme a las disposiciones legales, información sobre probables violaciones de los derechos de las víctimas.

V. Desarrollar y ejecutar programas especiales de atención a víctimas.

VI. Observar en todo tiempo que las víctimas, no sean discriminados por su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

VII. Vigilar que los usos y costumbres de la sociedad, no atenten contra los derechos humanos de las víctimas y, en su caso, propiciar acciones para inducir los cambios sociales y culturales necesarios.

VIII. Realizar con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las víctimas, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten.

IX. Recibir las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.



- X.** Investigar las presuntas violaciones a derechos humanos.
- XI.** Respetar, en el marco de sus investigaciones, los protocolos internacionales para documentación de casos de presuntas violaciones de derechos humanos.
- XII.** Solicitar, cuando sea conducente, medidas cautelares, necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, familiares o bienes jurídicos.
- XIII.** Dar seguimiento a las solicitudes que plantee ante la autoridad ejecutiva o judicial; en caso de advertir omisiones o incumplimientos por la autoridad o particular, denunciar las mismas por las vías pertinentes.
- XIV.** Utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para que de manera eficaz y oportuna, se busque fincar las responsabilidades administrativas, civiles o penales por graves violaciones a derechos humanos.
- XV.** Recomendar las reparaciones a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos con base en los estándares y elementos establecidos en la Ley.
- XVI.** Coordinarse con instituciones públicas y privadas en materia de atención a víctimas del delito para su protección eficiente y eficaz.
- XVII.** Recibir las denuncias por presuntos hechos delictivos y remitir las mismas al Ministerio Público.
- XVIII.** Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.
- Artículo 31.** Los municipios, en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, ejercerán las atribuciones siguientes:
- I.** Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, para la adecuada atención y protección a las víctimas.
- II.** Coadyuvar con el Gobierno Estatal, en la adopción y consolidación del Sistema.
- III.** Promover, en coordinación con el Estado, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas.
- IV.** Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa.
- V.** Apoyar la creación de refugios para las víctimas.
- VI.** Participar y coadyuvar en la protección y atención a las víctimas.
- VII.** Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.
- VIII.** Reglamentar sobre la capacitación de los servidores públicos a su cargo.
- IX.** Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales a los sistemas municipales y organismos auxiliares para el cumplimiento de la Ley.
- X.** Las demás que le confieren la Ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 32. Los servidores públicos, encargados de brindar atención a las víctimas y ofendidos del delito, tienen la obligación de proporcionar los servicios que correspondan oportunamente y llevar a cabo las acciones necesarias para el eficiente y eficaz cumplimiento de esta Ley, buscando el consenso y participación responsable de los sectores social y privado, así como:

I. Desarrollar con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, bajo un enfoque sensible y especializado.

II. Identificarse oficialmente con las víctimas.

III. Ofrecer a las víctimas atención inmediata y brindar un trato de respeto a sus derechos humanos.

IV. Hacer constar en el expediente respectivo que los derechos de las víctimas del delito se hicieron de su conocimiento y le fueron debidamente explicados.

V. Abstenerse de solicitar u obtener para sí o para otro u otros, de los particulares o de otros servidores públicos, por sí o por interpósita persona, dádivas de cualquier tipo, en numerario o en especie para permitir, realizar u omitir un acto o actos lícitos o ilícitos, relacionados con sus funciones.

VI. Capacitarse en lo que se refiere al estudio de la victimología y sus características de acuerdo con cada delito y, en especial, en los delitos vinculados con la violencia de género.

VII. Establecer los sistemas necesarios de vigilancia y verificación por parte de los órganos de control interno.

VIII. Las demás señaladas en la Ley, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 33. Tratándose de víctimas de delitos vinculados a la violencia de género, las dependencias y entidades deberán brindar atención digna por conducto de personal sensibilizado y especializado en perspectiva de género.

Artículo 34. Los actos discriminatorios hacia las víctimas del delito, provenientes de servidores públicos estatales y municipales serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 35. Todas las instituciones policiales, dependencias y organismos auxiliares de la Administración Pública del Estado de México y de los municipios están obligados a cumplir las órdenes que emitan el Ministerio Público y la autoridad judicial para la debida ejecución de las medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección que se dicten en los términos de las disposiciones legales aplicables.

TÍTULO TERCERO DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CAPÍTULO I OBJETO E INTEGRACIÓN



Artículo 36. El Sistema es la máxima institución en la materia en el Estado de México, que tiene por objeto establecer, regular y supervisar las directrices, planes, programas, proyectos, acciones y demás políticas públicas que se implementan para la protección de las víctimas y funcionará a través de un cuerpo colegiado denominado Comisión Ejecutiva.

El Sistema se integra por las siguientes instituciones:

I. Poder Ejecutivo

- a) El Gobernador.
- b) Secretaría General de Gobierno.
- c) Secretaría de Finanzas.
- d) Secretaría de Salud.
- e) Secretaría de Educación.
- f) Secretaría de Desarrollo Social.
- g) Consejería Jurídica.
- h) Procuraduría.
- i) Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
- j) Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México.
- k) DIFEM.
- l) Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México.
- m) Las demás que el Ejecutivo requiera dependiendo de la problemática que se atienda.

II. Poder Legislativo.

- a) El Presidente de la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia.
- b) El Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos.

III. Poder Judicial.

IV. Órganos Públicos Autónomos:

- a) Comisión.
- b) Universidad Autónoma del Estado de México.

V. Dos organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos, a invitación del Presidente, quienes tendrán derecho a voz pero no a voto.

Artículo 37. Las instituciones que integran el Sistema deben aportar la información necesaria para el cumplimiento del objeto de esta Ley, para lo cual, deberán:

- I.** Promover y fijar criterios para la coordinación de las instancias en sus respectivos ámbitos de competencia.
- II.** Proponer a la Comisión Ejecutiva lineamientos para la elaboración de los programas de atención a víctimas y ofendidos del delito y demás instrumentos programáticos relacionados.
- III.** Elaborar propuestas de reformas al marco jurídico en materia de atención a víctimas y ofendidos del delito.

IV. Las demás que le otorgue esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO II DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Artículo 38. La Comisión Ejecutiva es un órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica y gestión, quien estará a cargo del Fondo, el Registro y la Defensoría Especializada, así como las áreas de psicología y trabajo social.

Artículo 39. La Comisión Ejecutiva tiene por objeto permitir la representación y participación directa de las víctimas y ofendidos del delito en todas las instituciones del Sistema, propiciando su intervención en la gestión y la construcción de políticas gubernamentales, así como el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema; con la finalidad de garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, así como la prestación del servicio de asesoría jurídica.

Artículo 40. La administración y representación legal de la Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado, que será nombrado y removido por el Gobernador, a propuesta del Secretario General de Gobierno.

Artículo 41. Para ser Comisionado se requiere:

- I.** Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
- II.** Contar con título de licenciado en derecho o carrera afín.
- III.** Contar con estudios o experiencia profesional en materia de atención a víctimas del delito.
- IV.** No haber sido condenado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.

Artículo 42. La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

- I.** Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema.
- II.** Garantizar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados de primer contacto en psicología, trabajo social, atención médica, asesoría y atención jurídica que el Estado proporcionará a las víctimas de delitos y de violación a derechos humanos, para lograr su reincorporación a la vida social.
- III.** Elaborar y ejecutar programas de atención a las víctimas y canalizarlas a las instituciones competentes para la atención médica de urgencia.
- IV.** Solicitar a cualquier autoridad del Estado, así como autoridades federales y de las entidades federativas y del Distrito Federal, información que se requiera para una mejor atención a las víctimas conforme a las disposiciones legales aplicables.
- V.** Formular políticas, mecanismos, programas y estrategias de atención a víctimas del delito y delitos vinculados a la violencia de género.



- VI.** Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de los municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas de delito y de violación a derechos humanos.
- VII.** Los diagnósticos servirán de base para la elaboración de políticas públicas que integrarán el Programa de Atención Integral a Víctimas del Estado de México, así como para canalizar o distribuir los recursos necesarios.
- VIII.** Elaborar el Programa de Atención a Víctimas del Estado de México y proponerlo para su aprobación al Sistema.
- IX.** Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y demás políticas acordadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema.
- X.** Diseñar un mecanismo de seguimiento y evaluación de las obligaciones previstas en esta Ley.
- XI.** Proponer al Sistema las medidas previstas en esta Ley para la protección inmediata de las víctimas cuando su vida o su integridad se encuentren en riesgo.
- XII.** Coordinar a las Instituciones competentes para la atención de una problemática específica, de acuerdo con los principios establecidos en la Ley General.
- XIII.** Establecer mecanismos para la capacitación, formación, actualización y especialización de servidores públicos o dependientes de las instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.
- XIV.** Realizar las acciones necesarias para la adecuada operación del Registro.
- XV.** Rendir un informe anual ante el Sistema, sobre los avances del Programa Estatal de Atención a Víctimas y demás obligaciones previstas en esta Ley.
- XVI.** Administrar y vigilar el adecuado ejercicio del Fondo a fin de garantizar su óptimo y eficaz funcionamiento, con base en los principios de publicidad, transparencia y rendición de cuentas.
- XVII.** Nombrar a los titulares del Fondo, de la Defensoría Especializada y del Registro.
- XVIII.** Formular proyectos de leyes o reformas en la materia, para mejorar la prestación de los servicios y favorecer el ejercicio de los derechos de las víctimas.
- XIX.** Solicitar a la autoridad competente, se apliquen las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes.
- XX.** Promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, así como con las entidades federativas y el Distrito Federal.
- XXI.** En casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas, establecer programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación subsidiaria.
- XXII.** Promover la obtención de recursos, aportaciones y donaciones de organismos nacionales e internacionales.

XXIII. Elaborar su reglamentación interna.

XXIV. Crear comités especiales de atención a víctimas.

Los comités especiales llevarán a cabo el análisis, la investigación y la elaboración de diagnósticos situacionales y específicos que permitan focalizar las necesidades y políticas públicas integrales que respondan a la problemática y necesidades del Estado.

XXV. Impulsar la creación de refugios, albergues para niñas, niños, mujeres y hombres, y centros de asistencia social para brindar alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o desplazadas de su lugar de residencia, por el tiempo que sea necesario.

XXVI. Coadyuvar en las labores de capacitación especializadas de servidores públicos de las autoridades e instituciones integrantes del Sistema y de elaboración de protocolos periciales de atención a víctimas.

XXVII. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto y aquellas establecidas en otras disposiciones jurídicas.

Artículo 43. La Comisión Ejecutiva adoptará las medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológica, económica y emocional de las víctimas y ofendidos del delito y su pleno restablecimiento social y personal, particularmente tratándose de delitos vinculados a la violencia de género.

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva, a través de las instituciones encargadas de atender a las víctimas y ofendidos del delito, brindará un trato sin distinciones, inmediato, eficaz y respetuoso de sus derechos humanos, salvaguardando su seguridad e integridad física.

Las niñas, los niños, las y los adolescentes, así como los adultos mayores deberán ser atendidos respetando las condiciones propias de este grupo de la población, para las víctimas y ofendidos del delito con discapacidad, se observará la normatividad especializada para este sector de la sociedad; para las víctimas y ofendidos del delito integrantes de comunidades indígenas, la atención brindada se caracterizará por el respeto a su lengua y su cultura y, en los casos de delitos vinculados con la violencia de género, en términos de los acuerdos e instructivos que emita la Comisión Ejecutiva, se brindarán todas las facilidades para la incorporación de las víctimas del delito en programas tendientes a su plena reintegración social y rehabilitación personal y emocional.

Artículo 45. La Comisión Ejecutiva podrá celebrar convenios de coordinación con las autoridades federales y estatales de atención a víctimas y ofendidos del delito, con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley.

En los casos de violaciones graves a los derechos humanos o delitos cometidos contra un grupo de víctimas, el Ejecutivo del Estado, la Legislatura, los municipios, así como cualquier institución pública o privada que tenga entre sus fines la defensa de los derechos humanos podrán proponer a la Comisión Ejecutiva el establecimiento de programas emergentes de atención a las víctimas y ofendidos del delito.

Artículo 46. En la creación de los comités especiales, la Comisión Ejecutiva propiciará la focalización de necesidades y políticas gubernamentales que generen diagnósticos para evaluar la normatividad y programas en materia de atención a víctimas y ofendidos del delito.



Artículo 47. El Comisionado tendrá las siguientes facultades:

- I.** Administrar, representar legalmente y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva.
- II.** Proponer los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva.
- III.** Notificar a los integrantes del Sistema, los programas, acuerdos y demás actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidas en la presente Ley.
- IV.** Coordinar las funciones del Registro Estatal mediante la implementación de lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para vigilar el debido funcionamiento de dicho Registro.
- V.** Garantizar el registro de las víctimas que acudan directamente ante la Comisión Ejecutiva a solicitar su inscripción en el Registro, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral que soliciten a través de las instancias competentes, dando seguimiento hasta la etapa final para garantizar el goce efectivo de derechos.
- VI.** Celebrar convenios de colaboración o participación que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
- VII.** Proponer los programas operativos anuales y los requerimientos presupuestales anuales que correspondan a la Comisión Ejecutiva.
- VIII.** Nombrar y remover al personal de la Comisión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otra manera.
- IX.** Aplicar las medidas necesarias para garantizar que las funciones de la Comisión Ejecutiva se realicen de manera adecuada, eficiente, oportuna, expedita y articulada.
- X.** Las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

CAPÍTULO III DE LA COORDINACIÓN DE ACCIONES

Artículo 48. La Comisión Ejecutiva promoverá y vigilará el cumplimiento de los convenios o acuerdos que suscriban las instituciones públicas o privadas en materia de atención y protección a víctimas y ofendidos del delito.

Artículo 49. Para fortalecer la coordinación y concurrencia de acciones en materia de atención a las víctimas y ofendidos del delito, la Comisión Ejecutiva, deberá:

- I.** Concertar, sistematizar y ordenar a través del Secretario Técnico, la información proveniente de las dependencias y organismos del ejecutivo, así como de la Comisión, para dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades derivadas de la presente Ley.
- II.** Cumplir con las políticas y reglas, para la conformación y disposición transparente del Fondo.
- III.** Concertar la participación de organismos públicos y privados, organizaciones sociales y otras instancias que con motivo de sus funciones deban entrar en contacto con las víctimas.

IV. Supervisar en el ámbito de su competencia, la aplicación correcta de los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte en materia de atención a las víctimas, procurando su ejecución en tiempo y forma.

Artículo 50. La Comisión Ejecutiva, con el concurso y participación de las instituciones del Sistema, preverá un programa integral de comunicación social para dar a conocer los beneficios de la Ley en favor de las víctimas y ofendidos del delito.

CAPÍTULO IV DEL FONDO ESTATAL DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL

Artículo 51. Se crea el Fondo con el objeto de brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, cuya supervisión corresponderá a la Comisión Ejecutiva.

Artículo 52. El Fondo se constituirá con:

I. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin distinto.

II. Las donaciones de personas físicas y jurídicas colectivas.

III. Las reasignaciones presupuestales de otros programas.

IV. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas.

V. Los rendimientos que generen los recursos del Fondo.

VI. Los demás ingresos que por Ley le sean asignados.

La Comisión Ejecutiva tendrá derecho a exigir que el sentenciado restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquel cometió.

La Comisión Ejecutiva emitirá disposiciones relativas al funcionamiento del Fondo.

Artículo 53. El Fondo será administrado por la Comisión Ejecutiva siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas.

Los recursos económicos y materiales para el otorgamiento de los beneficios contemplados por la Ley serán aplicados por la Comisión Ejecutiva, quien los recibirá a través del Fondo.

Artículo 54. El titular de la Comisión Ejecutiva está facultado para realizar los trámites administrativos y financieros que sean necesarios para la obtención de los recursos del Fondo que se requieran para la atención de casos urgentes, sin perjuicio de que puedan ser modificados por la misma.

Artículo 55. Pueden ser sujetos del otorgamiento de los beneficios del Fondo, las víctimas que cumplan los requisitos siguientes:



- I.** Que por motivo de la comisión de algún hecho delictivo requiera del apoyo del Fondo.
- II.** No haber sido beneficiado por alguna otra institución pública o privada por el mismo hecho delictivo.
- III.** Estar inscrito en el Registro Estatal de Víctimas.
- IV.** Ser evaluado por la Comisión Ejecutiva en su entorno social con el objeto de determinar las medidas de atención particulares, para lo cual se integrará un expediente que contará al menos con los siguientes elementos:
 - a)** Documentos presentados por la víctima u ofendido del delito.
 - b)** Descripción del daño sufrido.
 - c)** Detalle de las necesidades que requiera la víctima u ofendido del delito para enfrentar las consecuencias del delito o la violación a sus derechos humanos.
 - d)** En su caso, relación de partes médicos o psicológicos.
- V.** Contar con sentencia ejecutoria en que se indique el daño causado por los ilícitos, así como el monto a pagar y otras formas de reparación.
- VI.** No haber recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o algún otro medio fehaciente.
- VII.** Presentar ante la Comisión Ejecutiva solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral. Dichas solicitudes se atenderán considerando:
 - a)** La condición socioeconómica de la víctima u ofendido del delito.
 - b)** La repercusión del daño en la vida familiar.
 - c)** La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño.
 - d)** El número y la edad de los dependientes económicos.
 - e)** Los recursos disponibles del Fondo.

Artículo 56. Las personas que hayan sido víctimas de algún hecho delictivo que cumplan con los requisitos estipulados en la Ley podrán solicitar el acceso a los beneficios del Fondo en los términos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo.

Artículo 57. La Comisión Ejecutiva se abocará a obtener la información conducente, así como a elaborar los estudios socioeconómicos correspondientes, para determinar la necesidad del otorgamiento y la procedencia de los beneficios solicitados por las víctimas y emitirá su opinión con relación a la procedencia de su otorgamiento.

Si las autoridades obligadas no pudiesen hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberán justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

Artículo 58. Cuando se advierta falsedad en la información proporcionada por el solicitante a la Comisión Ejecutiva, esta podrá suspender cualquier apoyo, sin perjuicio de fincar las responsabilidades correspondientes y, en tal caso, dará vista al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones respectivas y el ejercicio de sus atribuciones.

CAPÍTULO V REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS

Artículo 59. El Registro Estatal de Víctimas, es la unidad administrativa y técnica encargada del proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos del fuero local.

Artículo 60. La operación y funcionamiento del Registro estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 61. El Registro será suministrado por las siguientes fuentes:

I. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por la víctima o a través de su representante legal o de algún familiar o de persona de confianza.

II. Las solicitudes de ingreso que presenten las autoridades.

III. Los registros de víctimas existentes que se encuentren en cualquier institución o entidad del ámbito estatal, así como de la Comisión en aquellos casos en que se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien, se hayan celebrado acuerdos de conciliación.

Artículo 62. Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma gratuita ante la Comisión Ejecutiva a través del Registro Estatal.

Artículo 63. Para ser tramitada la incorporación de datos al Registro Estatal deberá como mínimo contener la siguiente información:

I. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que soliciten su ingreso. En caso que la víctima por cuestiones de seguridad solicite que sus datos personales no sean públicos, se deberá asegurar la confidencialidad de sus datos.

II. El nombre completo, cargo y firma del servidor público que recibió la incorporación de datos al Registro Estatal y sello oficial.

III. La huella dactilar de la persona que solicita el registro.

IV. La firma de la persona que solicita el registro. En los casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar se tomará como válida la huella dactilar.

V. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes.

VI. El servidor público que recabe la declaración la asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida.

VII. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no es la víctima quien lo hace. En caso que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

En el caso de faltar alguna de la información aquí señalada, la Comisión Ejecutiva pedirá a la autoridad que tramitó inicialmente la incorporación de datos que complemente la información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron el ingreso al Registro o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

Artículo 64. Será responsabilidad de las autoridades que reciban solicitudes de ingreso al Registro, las siguientes:

I. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa.

II. Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en persona, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de declaración diseñado por la Comisión Ejecutiva.

III. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos para tramitar la solicitud.

IV. Remitir al Registro el original de las solicitudes, al día siguiente hábil al de su llenado.

V. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su situación socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración.

VI. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados por el declarante y relacionar el número de folios que se adjunten con la declaración.

VII. Bajo ninguna circunstancia podrán negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a las que se refiere la Ley.

VIII. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en la Ley, y a las relativas a la protección de datos personales.

IX. Entregar a las víctimas acuse de recibo de su solicitud.

X. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva.

Artículo 65. Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

Para practicar esa valoración, la Comisión Ejecutiva podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los tres días hábiles. Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado, quien podrá asistir ante el Comité de Víctimas respectivo. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.

La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores, no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima.

No se requerirá la valoración de los hechos de la declaración cuando:

- I.** Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad jurisdiccional o administrativa competente.
- II.** Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las comisiones estatales en esta materia que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias.
- III.** La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un visitador de los organismos públicos de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución.
- IV.** Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que México le reconozca competencia.
- V.** Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

Artículo 66. La víctima tendrá derecho, además, a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.

Artículo 67. Se podrá cancelar la inscripción en el Registro cuando, después de realizada la valoración, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, cuando la Comisión Ejecutiva encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.

La decisión que cancela el ingreso en el Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado el ingreso con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, el recurso correspondiente de la decisión ante la Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada o revocada de acuerdo al procedimiento que establezca su Reglamento.

La notificación se hará en forma directa. En el caso de no existir otro medio más eficaz para hacer la notificación personal se le enviará a la víctima una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el formato único de declaración o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

Artículo 68. La información sistematizada en el Registro incluirá:

- I.** El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de declaración. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos.

- II. La descripción del daño sufrido.
- III. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante.
- IV. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante.
- V. La identificación de la persona o autoridad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente.
- VI. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima.
- VII. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima.
- VIII. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima.

La información que se asiente en el Registro deberá garantizar que se respeta el enfoque diferencial.

Artículo 69. La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de difusión, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción de la declaración y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro.

CAPÍTULO VI INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO

Artículo 70. El ingreso al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la noticia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

Artículo 71. Una vez recibida la denuncia, queja o noticia de hechos deberán ponerla en conocimiento de la autoridad más inmediata en un término que no excederá de veinticuatro horas.

Toda autoridad que tenga contacto con la víctima, está obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que se ofrezcan, la cual se hará constar en el formato único de declaración.

En el caso de las personas que se encuentren internas en algún Centro de Prevención y Readaptación Social del Estado estarán obligados de recibir la declaración las autoridades que estén a cargo de los centros.

Cuando un servidor público, en especial los que tienen la obligación de tomar la denuncia de la víctima sin ser autoridad ministerial o judicial, tenga conocimiento de un hecho de violación a los derechos humanos, como tortura, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecución arbitraria, violencia sexual, deberá denunciarlo de inmediato al Ministerio Público que corresponda.

Artículo 72. Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos tendrá la obligación de informar el nombre de la víctima al Sistema, aportando con ello los elementos que tenga. La Comisión Ejecutiva tendrá la obligación de hacerse de la información faltante a través del Comité correspondiente.

Cuando la víctima sea mayor de 12 años podrá solicitar su ingreso al sistema a través de sus representantes.

En los casos de víctimas menores de 12 años, se podrá solicitar su ingreso, a través de su representante legal o a través de las autoridades.

Artículo 73. El otorgamiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por la Comisión Ejecutiva, apoyada en las determinaciones que en sus actuaciones hagan las autoridades siguientes:

I. El Juez mediante sentencia ejecutoriada.

II. El Juez que tenga conocimiento del hecho y los elementos para acreditar que el sujeto es la víctima, pueden ser jueces civil, familiar, penal y de amparo.

III. El Ministerio Público.

IV. La Comisión.

V. Los organismos autónomos nacional o internacionales de protección de derechos humanos.

Artículo 74. El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

I. El acceso a todos los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

II. El acceso a los recursos del Fondo y la reparación integral, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y la normatividad que de ella emane.

III. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima atender adecuadamente la defensa de sus derechos, que el juzgador o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad en que esta se vea involucrada, y todos los efectos que de estos se deriven, en tanto su condición física y/o mental no sea superada.

Artículo 75. Las víctimas tendrán derecho a una compensación, en los términos y montos que una sentencia firme de un órgano jurisdiccional competente determine. En los casos que no hubiera sentencia, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva, y con base en el dictamen del Comité respectivo, la responsabilidad patrimonial del Estado será subsidiaria y compensará a la víctima. Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

TÍTULO CUARTO DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA PARA VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO I OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA



Artículo 76. Los servicios que presta la Defensoría Especializada se otorgarán a todas las víctimas y ofendidos del delito, sin distinción alguna motivada por razones de origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, credo o religión, prácticas culturales, opinión política o de otra índole, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Artículo 77. Se otorgará desde el momento de la comisión de un hecho delictivo que lesione o ponga en peligro los derechos de la víctima y ofendidos del delito.

Artículo 78. La Defensoría Especializada tiene por objeto operar, coordinar, dirigir y controlar la defensa especializada para víctimas y ofendidos del delito en materia penal; además el patrocinio en las materias civil, familiar, mercantil, administrativa, de amparo, laboral, y de derechos humanos cuando tales procedimientos se deriven de la comisión de un hecho delictivo.

Artículo 79. La Defensoría Especializada tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensa especializada de las víctimas y ofendidos del delito, así como garantizar el pleno ejercicio de sus garantías y derechos consagrados en la Constitución Federal, en los Tratados Internacionales, Constitución Local y demás ordenamientos legales.

Artículo 80. Son principios que rigen a la Defensoría Especializada:

I. Confidencialidad. Brindar la seguridad de que la información entre defensores y usuario se clasifique como confidencial.

II. Continuidad. Evitar las sustituciones innecesarias de la defensa.

III. Eficiencia. Aptitud en el desempeño de la función, para obtener los efectos institucionales establecidos en los plazos y condiciones que determine la Ley.

IV. Especialidad. La prestación del servicio se realizará con personal especializado en la atención a víctimas.

V. Eficacia. Aplicación en la conducta de los servidores públicos de los principios filosóficos y humanitarios de más amplia defensa de los derechos de las personas.

VI. Gratuidad. Prestar sus servicios de manera gratuita.

VII. Honradez. Actuar con rectitud sin esperar algún beneficio proveniente de cualquier persona.

VIII. Igualdad y equilibrio procesal. Contar con los instrumentos necesarios para intervenir en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad, favoreciendo el equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales.

IX. Independencia técnica. Garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos a la defensa de la víctima.

X. Legalidad. Sujetarse a la normatividad aplicable en el ejercicio de sus funciones y en el cumplimiento de sus fines.

XI. Obligatoriedad. Otorgar de manera indefectible el servicio de una defensa adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o bien cuando ha sido designado como abogado patrono.

XII. Profesionalismo. Aplicación de los conocimientos jurídicos para brindar un servicio adecuado, buscando la constante capacitación y actualización.

XIII. Responsabilidad profesional. Garantizar la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.

XIV. Solución de conflictos. Promover la asesoría e intervención en forma adicional al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos, participando en la conciliación, mediación y el arbitraje.

CAPÍTULO II DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA

Artículo 81. Serán atribuciones de la Defensoría Especializada, las siguientes:

I. Dirigir, controlar, supervisar y prestar los servicios que se establecen en esta Ley, así como observar los principios contenidos en el Código de Ética que para tal efecto se emita, y dictar las medidas que considere convenientes para el mejor desempeño de sus atribuciones.

II. Atender la defensa especializada en términos de ley desde el momento en que tenga contacto con cualquier persona que tenga la calidad de víctima y ofendido del delito, siempre que lo solicite y no cuente con un defensor de sus derechos.

III. Informar a las víctimas y ofendidos del delito del estado procesal de sus carpetas de investigación, averiguaciones previas o expedientes judiciales, a través de los Defensores Especializados del Centro de Atención o los medios tecnológicos de información.

IV. Canalizar a la víctima y ofendido del delito a las instituciones competentes para la atención inmediata que requiera.

V. Tutelar los intereses procesales de las víctimas y ofendidos del delito.

VI. Canalizar a las instancias públicas correspondientes, cuando conozca de asuntos en los que no es competente, y en su caso, a las asociaciones profesionales de abogados debidamente constituidas preferentemente en el Estado, conforme a la normatividad aplicable, sin perjuicio de que estas acepten brindar el servicio a la víctima y ofendido del delito.

VII. Asistir a todas las víctimas y ofendidos del delito, asesorándolos y patrocinándolos en materia penal, y además en las materias civil, familiar, mercantil y de amparo, cuando tales procedimientos se deriven de la comisión de un hecho delictuoso.

VIII. Promover los beneficios a que tenga derecho la víctima y ofendido del delito, de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte y las leyes de la materia de que se trate.

IX. Proponer convenios de coordinación y colaboración, respectivamente, con instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, ya sean locales, nacionales o internacionales, para el cumplimiento de su objeto, particularmente con las dedicadas a la protección de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos del delito.

X. Llevar el registro de control del servicio que presta.

- XI.** Promover y organizar programas de difusión de los servicios a su cargo.
- XII.** Promover la capacitación, actualización y especialización de los defensores de las víctimas y ofendidos del delito y demás servidores públicos.
- XIII.** Participar y colaborar con instituciones y organismos públicos y privados, en investigaciones académicas para reducir la victimización.
- XIV.** Las demás que le confieran otros ordenamientos jurídicos.

Artículo 82. La Defensoría Especializada, para el cumplimiento de sus atribuciones estará integrada por:

- I.** El Director.
- II.** Los subdirectores regionales.
- III.** Los coordinadores regionales.
- IV.** Los Defensores Especializados.
- V.** El demás personal que se requiera.

Son atribuciones de los servidores públicos de la Defensoría Especializada, las establecidas en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO III DEL DIRECTOR DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA

Artículo 83. La Defensoría Especializada estará a cargo de un Director, nombrado por el titular de la Comisión Ejecutiva.

Artículo 84. El Director de la Defensoría Especializada deberá reunir los requisitos siguientes:

- I.** Ser mexicano y vecino del Estado con residencia efectiva de cinco años anteriores la fecha de su nombramiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- II.** Tener título de Licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y experiencia en el ejercicio de la profesión con antigüedad mínima de cinco años.
- III.** No estar vinculado a proceso penal, ni haber sido condenado por sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso que amerite pena privativa de libertad.
- IV.** No estar inhabilitado por resolución que haya causado ejecutoria para el desempeño de funciones públicas.
- V.** Contar con estudios o experiencia profesional que acrediten conocimientos especializados en atención a víctimas.



Artículo 85. El Director de la Defensoría Especializada tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar, supervisar y evaluar los servicios de defensa, patrocinio, gestión y defensoría especializada que se establecen en esta Ley.
- II.** Dictar acuerdos, circulares, manuales de organización, procedimientos en general las medidas necesarias, para mejorar los servicios que ofrece la defensoría especializada.
- III.** Asumir la representación legal de la Defensoría Especializada, previa autorización del Secretario General.
- IV.** Dirigir y coordinar la óptima utilización de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Defensoría Especializada, para el cumplimiento de sus objetivos.
- V.** Coordinar los sistemas de formación, capacitación, actualización y especialización profesional, para la prestación de un servicio de calidad.
- VI.** Vigilar que en la aplicación de la presente Ley sean estrictamente respetados los derechos fundamentales de las víctimas.
- VII.** Proponer a la Comisión Ejecutiva, los proyectos de iniciativas que considere apropiados para el mejor desarrollo de los trabajos de la Defensoría Especializada o para consolidar el marco jurídico a favor de víctimas.
- VIII.** Coordinar los programas y estrategias para la difusión de los servicios que presta la Defensoría Especializada.
- IX.** Proponer a la Comisión Ejecutiva la creación de plazas de Defensores Especializados y empleados auxiliares que sean necesarios para un mejor servicio, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
- X.** Establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas para la atención de las víctimas que requieran atención médica de urgencia y de orientación psicológica especializada.
- XI.** Asignar el número de Defensores Especializados que se requieran en las subdirecciones y coordinaciones regionales.
- XII.** Calificar los casos en que proceda el patrocinio en asuntos civiles, familiares, mercantiles y en materia de amparo, derivados de un hecho delictuoso.
- XIII.** Presentar a la Comisión Ejecutiva para su conocimiento y aprobación, los planes de trabajo e informes de actividades de la Defensoría Especializada.
- XIV.** Proponer a la Comisión Ejecutiva el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores públicos a su cargo.
- XV.** Llevar un control de los asuntos en los que se preste el servicio de asesoría, defensa, patrocinio y gestión, así como el control estadístico correspondiente de la Defensoría Especializada.
- XVI.** Proveer en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de las funciones de la Defensoría Especializada.



XVII. Proponer la celebración de convenios con instituciones de educación superior, asociaciones de abogados o asociaciones civiles de defensa de derechos humanos, para su colaboración gratuita, en la atención de las víctimas y ofendidos del delito.

XVIII. Conceder licencias a los Defensores Especializados para separarse temporalmente de sus funciones, observando las disposiciones legales correspondientes.

XIX. Proponer a la Comisión Ejecutiva el proyecto de Código de Ética de los servidores públicos de la Defensoría Especializada.

XX. Informar periódicamente a la Comisión Ejecutiva el estado que guarda la Comisión Ejecutiva.

XXI. Implementar indicadores del desempeño individual de los Defensores Especializados.

XXII. Las demás que le señalen el Reglamento de esta Ley y otras disposiciones legales.

Artículo 86. Los subdirectores y coordinadores regionales deberán reunir los mismos requisitos establecidos en esta Ley para ser Director de la Defensoría Especializada, salvo el de la experiencia, que deberá ser de tres años.

CAPÍTULO IV DE LOS DEFENSORES ESPECIALIZADOS

Artículo 87. Para ser Defensor Especializado, se requiere:

- I.** Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
- II.** Tener título de Licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para ello.
- III.** No estar vinculado a proceso penal ni haber sido condenado por sentencia ejecutoriada como responsable de delito doloso que amerite pena privativa de libertad.
- IV.** No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas.
- V.** Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes.
- VI.** Contar con estudios o experiencia profesional que acrediten conocimientos especializados en atención a víctimas.

CAPÍTULO V OBLIGACIONES DEL DEFENSOR ESPECIALIZADO

Artículo 88. Son obligaciones del Defensor Especializado, las siguientes:

- I.** Asistir y asesorar gratuitamente a la víctima y brindarle un trato digno y humano.
- II.** Gestionar asistencia médica y psicológica de urgencia ante las instituciones correspondientes en favor de la víctima y ofendido del delito.



- III.** Proporcionar la asesoría y defensa jurídica gratuita a las víctimas y ofendidos del delito, sin distinción alguna por razón de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de su patrocinado.
- IV.** Solicitar en favor de la víctima la reparación del daño, y pugnar por la indemnización del daño material y moral causado.
- V.** Solicitar en favor de la víctima el pago de los tratamientos que como consecuencia del hecho delictivo, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima.
- VI.** Solicitar la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua a la víctima y sujetos protegidos, en caso de que no hable el idioma español o tenga discapacidad auditiva o visual, en cualquier etapa del proceso.
- VII.** Canalizar a las víctimas y ofendidos del delito a las instituciones públicas o dependencias del Estado, a efecto de que se les preste la atención especializada y profesional que estos requieran.
- VIII.** Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones.
- IX.** Abstenerse de solicitar a su patrocinado cualquier retribución económica o de cualquier especie por la prestación del servicio profesional.
- X.** Solicitar en términos de las disposiciones procesales aplicables, al Ministerio Público o a la autoridad judicial, según corresponda, se ordene el resguardo de la identidad y otros datos personales de la víctima y ofendido del delito, testigos y demás personas relacionadas en el procedimiento, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
- XI.** Brindar orientación a la víctima y ofendido del delito tratándose de delitos que admitan la celebración de acuerdos reparatorios, acerca de las consecuencias de carácter legal y patrimonial que implique dicha celebración, sin inducir a convenios que sean desfavorables para la víctima y ofendido del delito. Así mismo, informará con precisión cuáles son las condiciones y términos previstos en la legislación penal para tal efecto.
- XII.** Realizar las gestiones necesarias para la devolución de los objetos de la víctima y ofendido del delito relacionados con el hecho delictivo.
- XIII.** Ejercer la acción penal privada que le sea solicitada por la víctima, ante el Juez de Control competente en los delitos que proceda, en términos del Código de Procedimientos Penales aplicable.
- XIV.** Informar a la autoridad, los casos en que la víctima y ofendido del delito asistirán al desahogo de una diligencia acompañados de un profesional en materia de salud física o mental, cuando así se requiera para la conservación de la integridad de éstos.
- XV.** Informar a la víctima y ofendido del delito el derecho a resolver su controversia a través de los mecanismos alternativos previstos en las disposiciones legales.
- XVI.** Ofrecer todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso.



- XVII.** Interponer los recursos contra las resoluciones que afecten los intereses de la víctima y ofendido del delito en términos del Código de Procedimientos Penales aplicable, salvo que estos manifiesten su conformidad con la resolución dictada.
- XVIII.** Informar a la víctima y ofendido del delito el significado y la trascendencia jurídica del perdón, en caso de que deseen otorgarlo.
- XIX.** Comparecer en las audiencias, para alegar lo que a la víctima y ofendido del delito le convenga, en las mismas condiciones que los defensores del imputado.
- XX.** Impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación integral.
- XXI.** Realizar los trámites necesarios para la ejecución de la sentencia condenatoria, tratándose de la reparación integral a la que haya sido condenado el imputado del hecho delictuoso.
- XXII.** Observar el Código de Ética que se emita.
- XXIII.** Solicitar las providencias precautorias, medidas de protección o cautelares previstas en la Ley.

CAPÍTULO VI

DE LAS OBLIGACIONES DEL DEFENSOR ESPECIALIZADO EN CASOS DE TRATA DE PERSONAS Y SECUESTRO

Artículo 89. Tratándose de víctimas de los delitos de trata de personas y secuestro, son obligaciones del Defensor Especializado las siguientes:

- I.** Orientar, asesorar y brindar defensoría especializada a las víctimas durante la investigación y el juicio, a fin de hacer valer sus derechos.
- II.** Solicitar que la víctima se encuentre presente en el proceso, en una sala distinta en la que esté el imputado.
- III.** Procurar que las víctimas obtengan la información que se requiera de las autoridades competentes.
- IV.** Solicitar las medidas de protección, precautorias o cautelares procedentes en términos de la legislación aplicable, para la seguridad y protección de las víctimas, y para el aseguramiento de bienes a fin de garantizar la reparación del daño.
- V.** Aportar datos de prueba durante la investigación y el proceso.
- VI.** Requerir al Juez que al dictar sentencia condenatoria, en la misma se contenga la reparación del daño a favor de la víctima.
- VII.** En caso de secuestro, solicitar al Juez que las personas que hayan sido condenadas, queden sujetas a vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su liberación.

CAPÍTULO VII



DE LAS OBLIGACIONES DEL DEFENSOR ESPECIALIZADO TRATÁNDOSE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO

Artículo 90. Tratándose de delitos vinculados con niñas, niños y adolescentes víctimas, son obligaciones del Defensor Especializado, las siguientes:

- I.** Pugar que las niñas, niños y adolescentes sean tratados con tacto y sensibilidad durante todo el procedimiento penal, tomando en cuenta su situación personal, sus necesidades inmediatas, edad, género, discapacidad y nivel de madurez, respetando plenamente su integridad física y mental.
- II.** Velar por que las niñas, niños y adolescentes reciban un trato en lo individual como un ser humano con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales.
- III.** Promover ante las autoridades correspondientes, que limiten al mínimo necesario la interferencia en la vida privada de las niñas, niños y adolescentes en la investigación del delito, sin que ello implique mantener un bajo estándar en la recopilación de evidencias para el proceso penal.
- IV.** Procurar que las intervenciones de peritos, en su caso, se conduzcan de manera sensible y respetuosa, a fin de evitarles mayores afectaciones.
- V.** Vigilar que las actuaciones que se realicen con motivo del procedimiento penal, en donde deba de intervenir la niña, niño o adolescente, se utilice un idioma que estos hablen y entiendan.
- VI.** Velar por que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a un proceso libre de todo tipo de discriminación basada en origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, condición de niña, niño o adolescente o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.
- VII.** Brindar a las niñas, niños y adolescentes expectativas claras respecto de lo que deben esperar del proceso, con la mayor certidumbre posible.
- VIII.** Brindar servicios especializados de asistencia jurídica y de protección, tomando en cuenta la naturaleza del delito.
- IX.** Solicitar procedimientos adaptados a las niñas, niños y adolescentes en horas apropiadas a su edad y madurez, recesos durante las diligencias y demás medidas que resulten necesarias.
- X.** Solicitar la separación inmediata de la niña, niño o adolescente de su agresor, cuando éste último ostente la guarda o custodia, tutela o patria potestad, o que por cualquier motivo lo tuviere bajo su cuidado.
- XI.** Solicitar las medidas de protección y cautelares que sean procedentes, en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
- XII.** Tutelar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en las disposiciones legales aplicables y tutelar el interés superior de la infancia y adolescencia.

CAPÍTULO VIII DE LAS MEDIDAS ESPECIALES PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ADULTOS MAYORES, DISCAPACITADOS Y EXTRANJEROS



Artículo 91. Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, además de las medidas que establece la presente Ley, el Defensor Especializado deberá solicitar las medidas de protección o cautelares que resulten procedentes, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 92. Cuando una víctima u ofendido del delito sea adulto mayor y por su edad o estado de salud se le dificulte comparecer al procedimiento penal, el Defensor Especializado podrá solicitar el traslado de la autoridad que corresponda al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual fue citado, previa dispensa solicitada por sí o por un tercero, y siempre y cuando no se afecte el derecho de defensa ni el principio de contradicción.

Artículo 93. Cuando la víctima u ofendido del delito sea una persona discapacitada, el Defensor Especializado deberá prever las medidas conducentes para la práctica de las diligencias que sean procedentes, tomando en consideración la naturaleza de su discapacidad.

Artículo 94. Cuando la víctima u ofendido del delito sea una persona extranjera, el Defensor Especializado, con independencia de su situación migratoria, deberá prever las medidas conducentes para la práctica de las diligencias que sean procedentes, en el idioma del extranjero, en su caso, la comunicación con embajadas, consulados y demás autoridades.

CAPÍTULO IX DE LAS CAUSAS DE RETIRO DEL PATROCINIO

Artículo 95. La Defensoría Especializada podrá retirar el patrocinio a las víctimas y ofendidos del delito, cuando:

- I.** La víctima u ofendido del delito manifieste por escrito que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio.
- II.** Hayan transcurrido tres meses a partir de la fecha de expedición del oficio de canalización sin que se presente a la adscripción respectiva, sin causa justificada.
- III.** Exista evidencia de que la víctima u ofendido del delito recibe los servicios de un abogado particular.
- IV.** La víctima u ofendido del delito por sí mismo o por interpósita persona, cometa actos de violencia física o verbal, amenazas o injurias en contra de su Defensor Especializado o de servidores públicos de la Defensoría Especializada.
- V.** La finalidad del solicitante sea obtener un lucro o actuar de mala fe.
- VI.** Se presente en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga o enervante.
- VII.** Proporcione documentación falsa o alterada a su Defensor Especializado, para que esta sea exhibida ante cualquier otra autoridad.
- VIII.** Cualquier otra contraria a esta Ley que se advierta durante el procedimiento.

Para la suspensión, y en su caso, reanudación del servicio, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.



CAPÍTULO X DE LOS IMPEDIMENTOS PARA LA DESIGNACIÓN DE DEFENSORES ESPECIALIZADOS

Artículo 96. Los Defensores Especializados que sean designados a algún asunto, deberán dar aviso inmediato a su superior jerárquico a fin de ser sustituidos cuando:

- I.** Tengan parentesco sin limitación de grado o relación de amistad con el imputado.
- II.** Hayan presentado por sí, o su cónyuge o parientes, querrela o denuncia en contra de la víctima, ofendido del delito o imputado.
- III.** Tengan una relación sentimental, afectiva o contractual previa con la víctima, ofendido del delito o imputado.
- IV.** Sean o hayan sido tutores, curadores o administradores de los bienes de la víctima o contraparte, o sus herederos, legatarios, donatarios o fiadores.
- V.** Se presenten reiteradas muestras de desconfianza de parte del patrocinado, o reciba de su parte ofensas que afecten la objetividad en la defensa.

Artículo 97. Si existe un motivo para que el Defensor Especializado no pueda aceptar la designación y no lo hace del conocimiento inmediato de su superior jerárquico, el Director le aplicará la medida disciplinaria correspondiente y lo sustituirá por otro en el conocimiento de la causa o expediente de que se trate, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir.

Artículo 98. Cuando dos partes en un mismo conflicto soliciten el servicio de un Defensor Especializado, este tratará de avenirlas, si la naturaleza del asunto lo permite, de conformidad con la legislación de la materia; si llegasen a un acuerdo, el Defensor Especializado deberá continuar el trámite, en su caso, que corresponda.

CAPÍTULO XI DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA Y PRIMER CONTACTO

Artículo 99. La Comisión Ejecutiva contará con una Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto encargada de brindar servicios de orientación para víctimas y ofendidos sobre sus derechos, procedimientos, servicios y mecanismos de garantía contemplados en esta Ley; dar acompañamiento, ayuda inmediata, asistencia y atención en materia psicosocial, médica y de trabajo social de emergencia; así como de articular los esfuerzos de las instituciones que forman parte del Sistema Estatal de Atención a Víctimas para la adopción de las medidas de ayuda inmediata contempladas en la Ley General.

Artículo 100. La Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto estará conformada al menos por una unidad de atención psicosocial, una de trabajo social, una de atención médica y otra de representación de niñas, niños y adolescentes, integradas por profesionales en esas materias, especializados en la atención víctimas y ofendidos.

Artículo 101. Serán atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto las siguientes:

- I.** Diseñar y ejecutar las rutas especializadas, integrales e individualizadas de atención y acompañamiento a víctimas y ofendidos.

II. Brindar atención y asistencia a víctimas y ofendidos en las áreas de psicología, psiquiatría, asesoría jurídica, protección, alojamiento, alimentación, gastos funerarios de emergencia, transporte y atención médica urgente.

III. Gestionar, en los casos que el tipo de atención médica, psicológica o de cualquier otra índole que sea requerida por la víctima sea especializada y las instituciones locales no cuenten con ella, que dicho tratamiento médico se otorgue a la víctima en otras instituciones que cuenten con la especialidad.

IV. Tramitar las medidas de protección a que hubiere lugar ante las autoridades competentes.

V. Canalizar a la víctima u ofendido a las instituciones de salud pública.

VI. Establecer las causales para traslado inmediato de víctimas en caso de riesgo o urgencia, y realizar el traslado correspondiente.

Artículo 102. Los servicios médicos, psicológicos y de trabajo social que brinde la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto no sustituirán a los que están obligados a prestar a las víctimas u ofendidos las instituciones señaladas en esta Ley, sino que tendrán una función complementaria que habrá de privilegiar la atención de emergencias.

Los servicios que brinde la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto y sus unidades municipales serán las siguientes:

I. En materia de ayuda, asistencia y atención médica:

- a) Diagnóstico de emergencia.
- b) Dotación y aplicación de material médico quirúrgico, de osteosíntesis, prótesis y órtesis.
- c) Transporte de emergencia para hospitalización.

II. En materia de ayuda y asistencia psicológica y psiquiátrica:

- a) Atención de emergencia.
- b) Terapia individual o grupal.
- c) Acompañamiento psicosocial durante procesos administrativos o judiciales.

III. En materia de ayuda, asistencia y atención por parte de trabajadoras o trabajadores sociales:

a) Orientación para diseñar y desarrollar en conjunto estrategias de atención personalizadas, apoyando en las víctimas en la gestión y canalización a las instituciones competentes para cada una de sus necesidades.

b) Gestión ante la Comisión Ejecutiva de las medidas de ayuda inmediata y asistencia en materia económica, protección, traslado de emergencia, alojamiento temporal en los albergues para víctimas, ayuda en materia de gastos funerarios, medidas educativas y las demás que requiera la víctima en los términos de esta Ley.

c) Acompañamiento a las víctimas u ofendidos en procesos de reintegración social.

Artículo 103. La Comisión Ejecutiva emitirá los lineamientos y protocolos necesarios para la conformación, garantía de capacidad institucional y atribuciones de la Unidad de Atención Inmediata



y Primer Contacto. Su estructura, operación y funcionamiento se establecerán en el Reglamento de esta Ley.

TÍTULO QUINTO DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO ÚNICO DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 104. Las causas de responsabilidad de los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva estarán reguladas en el Reglamento.

Artículo 105. Todos los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva sujetos a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, incurrirán en responsabilidad administrativa.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales posteriores a su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

TERCERO. Se abroga la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 23 de febrero de 2009.

CUARTO. Se abroga la Ley de la Defensoría Especializada de Víctimas y Ofendidos del Estado de México publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 26 de octubre de 2011.

QUINTO. Las autoridades obligadas a prestar los servicios de atención y protección previstos en la presente Ley, deberán establecer anualmente las previsiones presupuestales que les permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma.

SEXTO. El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

SÉPTIMO. Los protocolos a que se refiere esta Ley se expedirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

OCTAVO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Unidades de Atención a Víctimas del Delito quedarán adscritas a la Comisión Ejecutiva, pero continuarán operando y funcionando en las sedes donde actualmente se encuentran.

NOVENO. Los convenios o instrumentos jurídicos celebrados a través del Instituto de Atención a las Víctimas del Delito del Estado de México dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, surtirán sus efectos en términos de las disposiciones que les dieron vigor y deberán ser renovados con las unidades administrativas competentes.

DÉCIMO. El Gobierno del Estado, sus dependencias y entidades deberán proveer lo necesario para adecuar la normatividad aplicable, así como para redistribuir los recursos humanos, materiales y

financieros existentes para la atención a víctimas a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.

DÉCIMO PRIMERO. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México y las Secretarías General de Gobierno, de Finanzas, de la Contraloría y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal proveerán lo necesario para dar cumplimiento a lo establecido por el presente Decreto.

DÉCIMO SEGUNDO. Los recursos del Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Hecho Delictuoso creado en la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 23 de febrero de 2009, se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas previsto en la presente Ley.

DÉCIMO TERCERO. Los recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituido mediante Acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado el 15 de junio de 2015 en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito previsto en la presente Ley.

DÉCIMO CUARTO. Los recursos de cualquier fondo de carácter estatal cuyo objeto sea la atención de las víctimas del delito, se transferirán al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito previsto en la presente Ley.

DÉCIMO QUINTO. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los seis días del mes de agosto de dos mil quince.- Presidente.- Dip. Juan Abad de Jesús.- Secretarios.- Dip. Laura Ivonne Ruíz Moreno.- Dip. Annel Flores Gutiérrez.- Dip. Juana Bastida Álvarez.- Rúbricas.

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

Toluca de Lerdo, Méx., a 17 de agosto de 2015.

**EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO**

**DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS
(RÚBRICA).**

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

**JOSÉ S. MANZUR QUIROGA
(RÚBRICA).**

APROBACION:

06 de agosto de 2015.



PROMULGACION:

17 de agosto de 2015.

PUBLICACION:

[17 de agosto de 2015.](#)

VIGENCIA:

Este Decreto entrará en vigor a los sesenta días naturales posteriores a su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.